

HONDURAS: INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA DE 2015

Resumen

La Constitución establece el libre ejercicio de todas las religiones. El gobierno solo reconoce oficialmente a la Iglesia católica romana y clasifica a los otros grupos religiosos como asociaciones religiosas con menos derechos y privilegios que la Iglesia católica. La Iglesia católica y otros criticaron que el Estado no reconociera las bodas religiosas celebradas sin el correspondiente certificado de matrimonio civil. Las comunidades religiosas no católicas criticaron la desigualdad en el reconocimiento y el trato de todas las iglesias, incluido el impuesto a la renta que el gobierno impuso a los sueldos de los clérigos no católicos y los impuestos a la importación de materiales religiosos del exterior.

Los adventistas del séptimo día indicaron que a veces las instituciones de enseñanza no respetan su celebración del sabbat, los sábados. Los testigos de Jehová indicaron que algunas instituciones de enseñanza les exigían participar en actividades patrióticas contrarias a su credo y algunas instituciones médicas se negaban a atenderlos porque no aceptarían transfusiones sanguíneas. Algunas musulmanas informaron de que se les negó el derecho a llevar el hiyab en oficinas gubernamentales y del sector privado. El gobierno trabajó con las organizaciones religiosas a fin de atender sus inquietudes relacionadas con la inscripción de las iglesias y facilitar la residencia de los misioneros.

Algunos activistas hicieron comentarios públicos en los que menospreciaban a ciertos grupos religiosos, sus creencias y sus prácticas. Hubo pruebas de la falta de tolerancia de algunos sectores de la sociedad hacia grupos religiosos, en particular en lo que respecta a asuntos de ámbito público como el presunto activismo de algunos grupos religiosos y sus estrechos vínculos con el gobierno. Surgieron incidentes relacionados con declaraciones antisemitas en la internet, en el marco de discusiones sobre la violencia entre israelíes y palestinos en Oriente Medio. Algunos musulmanes informaron de que se les ha negado el derecho a orar en horario laboral. Algunos activistas de la sociedad civil protestaron por la selección de un líder evangélico para formar parte de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos mantuvieron un diálogo con organizaciones y líderes religiosos, en el que se habló sobre el trato diferencial que se confiere a los grupos religiosos. Un tema importante fue la falta de una ley de

HONDURAS

inscripción de organizaciones religiosas que establezca una diferencia entre los grupos religiosos y las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos calcula que la población total asciende a 8,7 millones de habitantes (cifras de julio de 2015). Los principales grupos religiosos son los católicos romanos y los protestantes evangélicos. La Iglesia católica romana declaraba tener aproximadamente 6.85 millones de fieles, lo que representa el 79% de la población. Sin embargo, una encuesta realizada en 2014 por una empresa local de investigación de mercado y opinión pública indicaba que el 45% de los encuestados se calificó a sí mismo como protestante evangélico, el 41% como católico romano y el 11% como no afiliado a ninguna organización religiosa. Otros grupos religiosos destacados y sus cifras indicadas de fieles son: la Iglesia de adventistas del séptimo día (230,000); la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones, 165,000 fieles); testigos de Jehová (22,000); y una serie de grupos anabautistas y menonitas (18,000), episcopalianos y luteranos. Entre las iglesias evangélicas más destacadas se encuentra la Iglesia de Dios, las Asambleas de Dios, la Iglesia Vida Abundante, la Iglesia Amor Viviente, el Centro Cristiano Internacional y varias iglesias de la Gran Comisión. Un número cada vez mayor de iglesias evangélicas carece de afiliación religiosa. La Iglesia Morava está muy presente en la región de La Mosquitia, en el este del país. Hay una Iglesia cristiana ortodoxa en San Pedro Sula, que está principalmente al servicio de personas de origen árabe. Algunos grupos indígenas y afrohondureños practican credos africanos y amerindios o incorporan en sus prácticas y creencias religiosas elementos del cristianismo y de religiones africanas y amerindias. Representantes de las respectivas comunidades informaron de que hay aproximadamente 1,500 musulmanes y unos pocos centenares de judíos.

Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto

Marco legal

La Constitución establece el libre ejercicio de todas las religiones, siempre que dicho ejercicio no contravenga las leyes ni el orden público. Se prohíbe a los líderes religiosos desempeñar cargos públicos o efectuar declaraciones políticas.

HONDURAS

Por ley, solo la legislatura tiene facultad para conferir el reconocimiento jurídico a una iglesia. La ley distingue entre iglesias reconocidas, organizaciones religiosas inscritas como ONG y organizaciones religiosas no inscritas. La constitución faculta al poder ejecutivo para otorgar a las ONG, como las organizaciones religiosas, la personería jurídica necesaria para inscribirse ante el gobierno. El gobierno no exige inscripción de los grupos religiosos, pero los grupos inscritos pueden presentar solicitudes ante la Secretaría de Finanzas para recibir beneficios, tales como exenciones de pago de impuestos y de aranceles aduaneros. Para inscribirse, las organizaciones deben cumplir los requisitos de una ONG y contar con una junta directiva. El gobierno no distingue entre ONG religiosas y no religiosas. Las asociaciones que deseen obtener personería jurídica deben presentar una solicitud a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con la descripción de su organización interna, los estatutos y los objetivos. La Procuraduría General de la República debe revisar todas las solicitudes de los grupos religiosos y emitir un dictamen constitucional. Las organizaciones aprobadas deben presentar al gobierno informes anuales financieros y de actividades.

La constitución determina que la educación pública será laica y permite el establecimiento de centros de enseñanza privados. Los padres tienen derecho a escoger la educación que reciben sus hijos, incluida la educación religiosa.

Los trabajadores religiosos extranjeros pueden solicitar residencia hasta por cinco años. Algunas iglesias, como los adventistas del séptimo día y los mormones, tienen acuerdos de facilitación de migración con la Secretaría de Gobernación y Justicia, que especifica la documentación exigida para tramitar los permisos de residencia para los trabajadores religiosos de esas iglesias. Las iglesias que no tienen acuerdos de esa índole deben proporcionar prueba de empleo en la respectiva iglesia y comprobante de ingresos. Para renovar sus permisos de residencia, los trabajadores religiosos deben presentar prueba de empleo ininterrumpido en la iglesia patrocinadora al menos 30 días antes del vencimiento su residencia. La ley prohíbe la inmigración de misioneros extranjeros que practican religiones que alegan el uso de brujería o ritos satánicos, y permite la deportación de extranjeros que practican brujería o el “fraude religioso”. De conformidad con la ley de migración y extranjería del país, las personas que ejerzan “fraudulentamente profesión u oficio, o [cometan] fraude contra la salud de los ciudadanos, sus creencias religiosas o su patrimonio familiar” también pueden ser sancionadas con multas o enfrentar otras consecuencias jurídicas.

HONDURAS

El Código Penal protege a los clérigos que están autorizados a trabajar en el país de ser obligados a dar testimonio sobre información privilegiada obtenida con carácter confidencial durante una confesión religiosa. No se exige a los vicarios, los obispos y los arzobispos de la Iglesia católica romana, ni a personas de rango similar de otras iglesias reconocidas jurídicamente que se presenten a comparecer ante un tribunal si son convocados. Sin embargo, se les exige hacer una declaración en un lugar de su elección.

Los funcionarios religiosos que celebren matrimonios religiosos sin exigir la licencia de matrimonio civil son sancionados con multas de entre 50,000 y 100,000 lempiras (entre US \$2,242 y US \$4,484) y se enfrentan a la prohibición legal de practicar sus funciones religiosas por un período de entre cuatro y seis años.

El gobierno suscribió la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que reconoce el derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio.

Prácticas gubernamentales

El gobierno siguió distinguiendo a la Iglesia católica como la única iglesia reconocida jurídicamente, clasificando a otros grupos religiosos como asociaciones religiosas. Otros grupos religiosos criticaron el hecho de que el gobierno no los reconociera como iglesias y la imposibilidad de recibir los beneficios correspondientes, como la exención del pago de impuestos para los sueldos del clero y los materiales religiosos importados. Los grupos religiosos criticaron que el Estado no reconociera los matrimonios religiosos celebrados sin una licencia civil.

Las organizaciones religiosas criticaron la aplicación de un reglamento de inscripción uniforme para todas las organizaciones sin fines de lucro y dijeron que deberían ser reconocidas como grupos religiosos más que como organizaciones no gubernamentales. La oficina de inscripción del gobierno para organizaciones civiles publicó directrices separadas, pero aparentemente idénticas, para las iglesias. El gobierno siguió trabajando con algunas organizaciones religiosas para abordar inquietudes relacionadas con la inscripción. Las organizaciones religiosas criticaron duramente el requisito del gobierno de que todas ellas tengan una junta directiva inscrita por el gobierno y presenten informes anuales financieros y de

HONDURAS

actividades. Los grupos pequeños o sin afiliación religiosa indicaron que es particularmente difícil cumplir esos requisitos.

Algunos musulmanes informaron de que no se permitía a las mujeres musulmanas llevar el hiyab cuando trabajaban como funcionarias del gobierno en centros de salud pública, oficinas del sistema nacional de salud o locales judiciales. Según se informó, se permitió a las abogadas privadas llevar el hiyab en los tribunales.

A pesar de una carta emitida en 2014 por el Ministro de Educación, en la que se dispensa a los miembros de la Iglesia adventista del séptimo día de asistir a los “sábados cívicos”, los miembros de la Iglesia informaron de que algunos docentes y directores igual aspiraban a contar con asistencia esos sábados en las escuelas públicas y privadas. Asimismo, los líderes de la Iglesia declararon que las universidades públicas no habían respondido de manera positiva o habían rechazado completamente las quejas presentadas por sus miembros en 2014, con relación a que no se han ofrecido alternativas a las clases sabatinas para estudiantes adventistas. Al final del año quedaba pendiente un recurso de apelación ante la Universidad Nacional de Profesores. Los líderes de la Iglesia intentaron presentar una queja en octubre ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), pero fueron rechazados y se les indicó que ese asunto no era de la competencia del CONADEH.

Una disposición redactada en 2010, por la que se exige que los testigos de Jehová canten el himno nacional, rindan homenaje al pabellón nacional y participen en otros actos patrióticos, sigue figurando en las directrices escolares de la Secretaría de Educación a pesar de una decisión del director jurídico de la Secretaría, tomada en 2014, que estipula que no ha de aplicarse dicha disposición. Un estudiante de escuela privada se cambió de escuela tras haber sido obligado a participar en actos patrióticos. Las universidades permitieron a estudiantes que presentaban una declaración por escrito indicando su afiliación a los testigos de Jehová abstenerse de asistir a actividades patrióticas. Algunos hospitales públicos se negaron a atender a testigos de Jehová que se negaban a recibir transfusiones sanguíneas.

Aunque se prohíbe a los líderes religiosos desempeñar cargos políticos, ha trascendido que algunos pastores protestantes, sin embargo, desempeñaron cargos de elección en el Congreso, incluido uno que está designado como tercero en línea de sucesión presidencial contemplada en la Constitución.

HONDURAS

El gobierno exigió a los misioneros extranjeros que obtuvieran permisos de ingreso y residencia. Una institución o una persona local debía patrocinar la solicitud de residencia de un misionero presentada ante las autoridades de inmigración. El gobierno tenía acuerdos con miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), los mormones y los adventistas del séptimo día, entre otros, para facilitar el ingreso y los permisos de residencia de sus misioneros. El gobierno aprobó las exenciones tributarias para la ayuda de emergencia facilitada por algunas organizaciones religiosas como las de los mormones y los adventistas del séptimo día, así como algunas agrupaciones evangélicas. Desde 2010, los testigos de Jehová no han podido recibir exenciones tributarias para materiales religiosos importados.

Las fuerzas armadas tenían un santo patrono oficial de la Iglesia católica. Los comandantes de bases militares seleccionaron capellanes católicos o protestantes. Tanto católicos como protestantes evangélicos destacados desempeñaban funciones en comisiones gubernamentales. El gobierno invitó periódicamente a dirigentes católicos y evangélicos a ofrecer oraciones en eventos gubernamentales. El presidente de la CEH ocupó un cargo en la Junta Nominadora encargada de seleccionar candidatos para que el Congreso los nomine a la Corte Suprema de Justicia.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto

Algunos activistas hicieron comentarios públicos en los que menospreciaban a ciertos grupos religiosos, sus creencias y sus prácticas. En el sitio web de una destacada agencia de noticias, en el que se comentaba acerca de un artículo sobre reglamentar los niveles de ruido de las congregaciones evangélicas, por ejemplo, un comentarista dijo que los evangélicos son “un atajo de hipócritas. Siempre hablando de Dios y de los pecados y son Uds. los primeros en cometer todo tipo de tropelías contra la gente”.

Hubo duras críticas de algunos sectores de la sociedad respecto de algunos grupos protestantes evangélicos y, en menor grado, la Iglesia católica, por presuntas actividades políticas y vínculos estrechos con el gobierno. Los grupos religiosos indicaron que algunos medios de comunicación proporcionaron información incorrecta y provocadora sobre las actividades de los líderes religiosos. En uno de los casos, una destacada organización de medios de comunicación informó sobre

HONDURAS

afirmaciones realizadas por una activista de los derechos de los indígenas que indicaba que el único cardenal católico del país había fomentado el odio, la discriminación y el racismo al disuadir a los indígenas católicos romanos de que se unieran a su ONG o escucharan emisoras que simpatizaran con sus actividades. Un representante de la Iglesia católica negó estas acusaciones y dijo que el cardenal no se encontraba en el país en el momento de sus supuestos comentarios.

Surgieron incidentes relacionados con declaraciones antisemitas en la internet, en el marco de discusiones sobre la violencia entre israelíes y palestinos en Oriente Medio. Miembros de la comunidad judía informaron de que siguieron oyendo expresiones peyorativas acerca de los judíos en conversaciones sobre temas generales.

Algunas musulmanas informaron de que se les negó el derecho a llevar el hiyab en oficinas del sector privado o se les solicitó que lo retiraran al pasar por los controles de seguridad de un banco. Algunos musulmanes informaron de que se les ha negado el derecho a orar en horario laboral.

Algunos activistas de la sociedad civil protestaron por la selección de un miembro de la CEH para actuar como representante en la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las organizaciones religiosas respondieron que estaban participando en el proceso, como era su derecho en calidad de ONG.

Sección IV. Política del Gobierno de los Estados Unidos

Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos mantuvieron un diálogo con organizaciones y líderes religiosos, en el que se habló sobre el trato diferencial que se confiere a los grupos religiosos. Un tema importante fue la falta de una ley de inscripción de organizaciones religiosas que establezca una diferencia entre los grupos religiosos y las ONG.